

ÍNDICE AI: ASA 16/20/98/s

EMBARGADO HASTA LA 1 HORAS GMT del viernes 7 de agosto de 1998

Myanmar: Décimo aniversario de la represión militar

El 8 de agosto se cumplen diez años del inicio de la represión en Myanmar por un gobierno militar que mató a miles de civiles al tomar el poder y que desde entonces ha matado, torturado, violado, encarcelado y reasentado por la fuerza a cientos de miles de birmanos.

«Mañana se cumplen no sólo diez años de sufrimiento para el pueblo birmano, sino también una década de ímproba lucha por los derechos humanos y las libertades fundamentales —ha declarado Amnistía Internacional—. Asimismo, es el momento de que la comunidad internacional renueve su compromiso de apoyar al pueblo birmano en su causa.»

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades de Myanmar la libertad de los presos de conciencia, como una indicación de la seriedad de su compromiso para mejorar la situación de los derechos humanos en el país, destacando de entre los más de mil presos políticos los casos de diez personas que merecen una consideración humanitaria especial.

«Algunos de estos hombres y mujeres llevan casi diez años en prisión sólo por escribir cartas y repartir folletos. La mayoría están físicamente destrozados por su experiencia en prisión. ¿Por qué les tiene miedo el gobierno?», ha declarado Amnistía Internacional.

«La excarcelación de los presos contribuiría a reducir la creciente tensión, a crear confianza entre los ciudadanos y a mostrar su buena fe ante la comunidad internacional.»

Amnistía Internacional ha pedido también al gobierno de Myanmar que haga que las condiciones penitenciarias se ajusten a las normas internacionales, que ponga fin a los homicidios ilegítimos, que cese de hostigar a miembros de la oposición, y que ponga fin a los reasentamientos forzosos por motivos étnicos, a la utilización de portadores forzosos y a los malos tratos a los trabajadores forzosos.

El día en que se cumplen diez años de represión militar es también un momento importante para que otros gobiernos reflexionen sobre su inacción a la hora de propiciar un cambio en Myanmar, ha manifestado Amnistía Internacional.

«Pese a todas las declaraciones, pese a todas las sanciones, pese a todas las promesas de producir resultados, las cosas en Myanmar sólo han empeorado —ha declarado Amnistía Internacional—. Y no es difícil saber por qué.»

«Myanmar ha seguido recibiendo consuelo de China, de sus socios de la ANSEA y de empresas e inversores dispuestos a mantener la boca cerrada mientras hacen negocios allí —ha manifestado Amnistía Internacional—. Ha llegado el momento de que otros gobiernos hagan de esto una cuestión a tratar entre ellos, no sólo con los generales de Yangon. Una auténtica acción concertada de todas las partes de la comunidad internacional podría cambiar esta situación.»

La organización ha pedido a otros gobiernos que garanticen que la situación de los derechos humanos en Myanmar sigue figurando en el orden del día de todas las reuniones internacionales y regionales, que presionen al gobierno de Myanmar para que ponga en libertad a los presos y permita el acceso del relator especial de la ONU para los derechos humanos en Myanmar y que se aseguren de que

ninguna inversión en Myanmar propicia nuevas violaciones de derechos humanos, en especial las inversiones en proyectos que emplean mano de obra forzada.

Información general

En Myanmar, el gobierno del Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo sigue reprimiendo de forma implacable a la disidencia: actualmente hay más de 1.200 presos políticos condenados a penas largas de prisión y las detenciones y actos de intimidación contra estudiantes y miembros de la oposición son constantes. Entre las víctimas figura Daw Aung San Suu Kyi, líder de la Liga Nacional para la Democracia (LND), que obtuvo el 82 por ciento de los escaños en las elecciones de 1990 que el ejército se negó a reconocer.

El hostigamiento ha continuado hasta ahora. En julio, los soldados impidieron en varias ocasiones a Aung San Suu Kyi y a sus compañeros desplazarse fuera de la capital, Yangon, para reunirse con otros miembros de la LND. Estas restricciones a su libertad de circulación culminaron en un indignante enfrentamiento en una carretera, ocurrido a finales de julio, que el gobierno decidió resolver por la fuerza y no por el diálogo pese a la condena generalizada que recibió de la comunidad internacional.

Los presos políticos viven en condiciones que ponen en peligro su vida en la prisión de Insein, Yangon, donde varios reclusos han muerto debido a los malos tratos y a la ausencia de atención médica. Además de la tortura y las palizas, algunos presos, entre ellos un hombre de 68 años, fueron obligados a permanecer varias semanas en una caseta para perros como castigo. Los estudiantes que destacaron en las manifestaciones de 1998 han pagado también un precio muy alto; muchos de los detenidos tras las manifestaciones de 1996 siguen en prisión.

Además de las personalidades de la oposición, los miembros de las minorías étnicas de Myanmar han sido los más afectados por los intentos del gobierno de responder al conflicto armado interno. En los últimos diez años, el gobierno ha sometido a reasentamiento forzoso, bajo amenaza de muerte, a cientos de miles de estas personas.

El ejército obliga a poblaciones enteras a abandonar sus aldeas sin previo aviso, mientras los soldados se llevan su ganado y queman sus casas. Los habitantes hambrientos que regresan a sus antiguas aldeas para obtener comida han muerto a tiros. Amnistía Internacional ha recibido nuevos informes de matanzas de aldeanos similares a los perpetrados en el estado de Shan el pasado año.

Cientos de miles de personas siguen siendo obligadas a trabajar para proyectos de infraestructura, como la construcción de carreteras, ferrocarriles y aeropuertos y la excavación de canteras. Quienes no pueden soportar el duro trabajo durante largas horas y en condiciones a veces peligrosas son sometidos a golpes.

Decenas de miles de personas han sido obligadas a trabajar como porteadores para el ejército, para el que transportan equipos y armas. Los soldados matan a tiros o golpean hasta la muerte a los enfermos y ancianos que no pueden mantener el ritmo. También se han recibido informes según los cuales se obliga a los porteadores a caminar a través de campos de minas para despejar el camino a los soldados.

Según Amnistía Internacional, el trato que da el gobierno a las minorías étnicas está teniendo consecuencias catastróficas para los países vecinos. Al menos 80.000 shan y 100.000 karen están

refugiados en campamentos situados a lo largo de la frontera de Tailandia. Miles de refugiados chin están actualmente en la zona occidental de la India y al menos 20.000 rohingyas viven en Bangladesh.

Casos de presos de conciencia

Las siguientes personas son algunos de los diez presos de conciencia cuyos casos ha destacado Amnistía Internacional con motivo de los diez años de represión.

- C **U Ohn Myint**, de 81 años, fue detenido el 28 de febrero de 1998, y durante varias semanas nadie supo su paradero. En mayo fue condenado a siete años de prisión por ayudar a producir una historia del movimiento estudiantil. Ya estuvo encarcelado entre 1989 y 1993.
- C **U Win Tin**, de 68 años, está encarcelado desde julio de 1989 y no está previsto dejarle en libertad hasta el 2008. Padece del corazón. En marzo de 1996 le ampliaron la pena por intentar, presuntamente, hacer salir clandestinamente de la Prisión de Insein una carta para el relator especial de la ONU sobre Myanmar en la que describía las malas condiciones penitenciarias.
- C **Daw San San**, de 68 años, cumple una pena de 25 años de prisión. Elegida como parlamentaria de la LND, fue detenida por debatir con otros miembros de la Liga qué hacer si el ejército seguía negándose a ceder el poder. Excarcelada en virtud de una amnistía en 1992, fue detenida de nuevo el año pasado por tratar de organizar una reunión del partido.

Entre los restantes presos de conciencia se encuentran Daw San San Nwe, escritora de 53 años; Moe Kalayar Oo, estudiante de filosofía; Zaw Min, médico de 38 años; U Win Htein, alto cargo de la LND, y Maung San Hlaing, guardaespaldas de Daw Aung san Suu Kyi.